



“NI VENCEDORES, NI VENCIDOS.” EL PRIMER INTENTO DE CONSTRUIR UN ORDENAMIENTO POSTERIOR A PERÓN ENTRE LOS SINDICATOS Y EL ESTADO

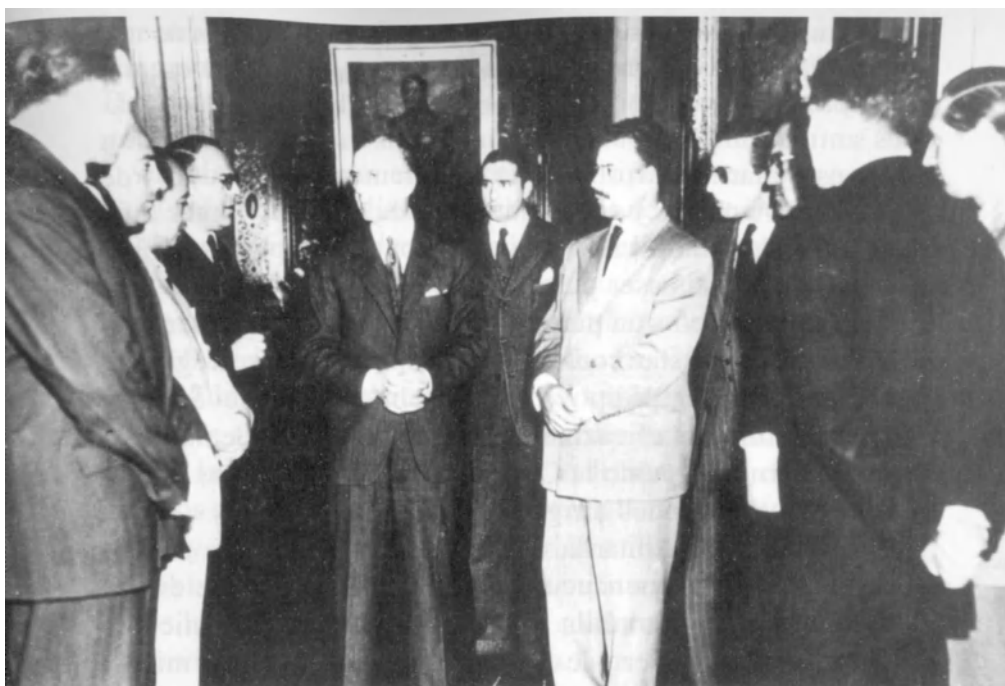
En su discurso de asunción, pronunciado el 23 de septiembre de 1955 tras la jura como nuevo presidente provisional, el general Eduardo Lonardi anunció que en la Argentina posperonista no habría “ni vencedores, ni vencidos”. Su intención era, sobre todo, tranquilizar a la masa de trabajadores peronistas preocupados por el destino de las conquistas sociales y económicas alcanzadas con Perón y de las organizaciones sindicales que las garantizaban. La lógica subyacente a la política de Lonardi con respecto al movimiento sindical peronista era clara. El presidente y sus partidarios dentro del gobierno provisional estaban dispuestos a admitir que los peronistas siguieran controlando los sindicatos. Su única salvedad era que debía tratarse de un peronismo purificado de

los vicios que lo habían corrompido y conducido a la derrota.

El ala nacionalista de la oposición a Perón coincidía con mucho de lo que se había logrado. Para ellos, el peronismo representaba un baluarte contra el comunismo. La cuestión tenía que ver, en esencia, con los límites y los excesos. Si los gremios reconocían la necesidad de mantenerse dentro de su propia esfera y la demagogia corrupta de los elementos más estrechamente asociados a Perón podía eliminarse, los sindicatos conducidos por los peronistas tendrían un papel crucial en la Argentina posperonista como órganos de control social y canales de expresión de la clase obrera. Luis Cerruti Costa, el ministro de Trabajo, adoptó en consecuencia una política de avenencia con la conducción gremial peronista. La CGT quedó en manos de ésta, lo mismo que, en un inicio, muchos de los grandes sindicatos.

El intento de Lonardi de llevar a la práctica esta política fracasaría a mediados de noviembre, y el primer mandatario sería reemplazado por su vicepresidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, líder del campo militar antiperonista de línea dura. Varias razones explicaban ese fracaso. La posición de Lonardi era minoritaria entre los militares y las fuerzas cívicas que habían llevado a cabo la Revolución Libertadora. El grupo dominante dentro del campo antiperonista consideraba el peronismo como una calamidad que era preciso exorcizar de todos los sectores de la sociedad argentina. Les preocupaba en especial la autoridad peronista sobre la clase obrera. En armonía con esta línea de pensamiento, grupos armados de antiperonistas se habían apoderado de muchos sindicatos en las semanas siguientes al golpe. Estos grupos eran conocidos como “comandos civiles” y estaban compuestos principalmente por activistas socialistas y radicales que habían desempeñado un destacado papel en la rebelión contra Perón. Se veían a sí mismos como una milicia civil que actuaría como un bastión contra la amenaza de un resurgimiento peronista.

De tal modo, mientras Lonardi y su ministro de Trabajo procuraban concertar con la conducción gremial peronista un compromiso que posibilitara una continuidad modificada de la situación laboral previa a septiembre, los antiperonistas intensificaban sus ataques a los locales sindicales e instaban a sus partidarios dentro del gobierno provisional a efectuar una



El general Lonardi con sindicalistas. En el extremo derecho, Augusto Vandor.

completa purga de la influencia justicialista en los gremios. Como resultado de esa situación, la conducción peronista de la CGT, encabezada por Andrés Framini y Luis Natalini, comenzó a dudar cada vez más, si no de las intenciones, sí al menos de la capacidad de Lonardi y sus seguidores nacionalistas de cumplir sus promesas. Lo cierto era que el sector nacionalista del gobierno provisional no tenía la autoridad suficiente dentro de la policía o las Fuerzas Armadas para impedir los ataques antiperonistas y la toma de locales u oponerse al arresto de una creciente cantidad de funcionarios sindicales peronistas de nivel medio.

En este contexto de tensión y recelos en aumento, surgió otro actor como figura crucial en la resolución del interregno de Lonardi. Las bases gremiales peronistas, en un principio aturdidas por el golpe contra Perón, habían demostrado en los dos meses siguientes una creciente disposición a resistir y preservar “algo que por instinto sentían estar perdiendo”. Gran parte de esa resistencia dejó a un lado a la conducción sindical

peronista. El 17 de octubre y una vez más a comienzos de noviembre se produjeron huelgas espontáneas en gran escala, como protesta por la situación nacional en general y los ataques antiperonistas contra los sindicatos en particular. A su turno, esto alarmó y fortaleció a los elementos más duros de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles e hizo aún más difícil para Lonardi dar el tipo de concesiones que podrían haber tranquilizado a las bases peronistas.

La CGT convocó a un paro general para el 14 de noviembre, con el fin de protestar contra la asunción del nuevo régimen. Pese a un considerable apoyo entre las bases, las nuevas autoridades reprimieron eficazmente la medida y el 16 de noviembre el gobierno intervino la CGT y todos sus sindicatos miembros y detuvo a muchos dirigentes.

El interregno de Lonardi, en consecuencia, puso de relieve la existencia de una conducción sindical peronista que estaba profundamente confundida y sacudida por acontecimientos que le costaba entender y le era imposible controlar. Al mismo tiempo, la clase obrera peronista había comenzado a exhibir una firme voluntad de defender sus sindicatos. Esta voluntad sería un factor crucial en el desarrollo de las relaciones entre los gremios, los trabajadores y el régimen militar en el período siguiente.

EL GOBIERNO DE ARAMBURU, LA RESISTENCIA OBRERA Y LA SUPERVIVENCIA DEL PERONISMO

El nuevo gobierno provisional del general Pedro Eugenio Aramburu y el vicealmirante Isaac Rojas se dispuso a abordar de inmediato lo que para ellos era un problema nacional decisivo: la persistente influencia peronista en todos los niveles de la sociedad argentina. Según su criterio, el peronismo era una aberración que era preciso borrar de la conciencia nacional. En la esfera de la clase obrera y sus instituciones, esto significaba varias cosas. En el nivel más concreto, las autoridades intentaron proscribir a toda una generación de funcionarios gremiales peronistas. El decreto 7.107 excluyó de la actividad sindical a todos aquellos que habían tenido cargos representativos entre 1952 y septiembre de 1955, así como a quienes eran indagados

por una comisión especial creada para investigar los delitos e irregularidades cometidos por los funcionarios justicialistas. De manera similar, quedaron proscriptas todas las actividades políticas peronistas.

Al mismo tiempo, esta ofensiva antiperonista se extendió a la base fabril. Inmediatamente después de la intervención de la CGT en noviembre de 1955, el Ministerio de Trabajo del nuevo régimen declaró disueltas todas las comisiones internas de delegados. A principios de 1956, por lo tanto, la situación sindical había cambiado radicalmente. La CGT estaba bajo el control de un interventor militar, el capitán Patrón Laplacette, que sería asistido por un consejo asesor de figuras antiperonistas de la época anterior a 1945. Además de la detención de muchos miles de funcionarios justicialistas de alto y mediano rango y de la proscripción de varios millares de ex activistas, se habían designado interventores militares y antiperonistas en todos los sindicatos. El sueño del gobierno militar y sus asesores civiles era que, luego de una etapa de necesaria purga, el terreno quedara despejado para la elección de dirigentes gremiales verdaderamente “democráticos”.

El sueño se demostraría irrealizable. Hacia 1957 el gobierno terminaría por reconocer que no había logrado borrar la influencia peronista. Las raíces de este fracaso residen en la naturaleza de las políticas del gobierno militar y en la virulencia de su ofensiva antiperonista. El régimen estaba decidido a llevar esa ofensiva al nivel más elemental de la experiencia obrera en el proceso de producción. El decreto 2.739 autorizaba a la patronal a eliminar lo que definía como “obstáculos a la productividad”. Junto con el ataque a las comisiones internas, la cuestión de esos “obstáculos” se convertiría en una piedra de toque crucial en la mente de los trabajadores, a través de la cual éstos podrían apreciar las consecuencias concretas del cambio de autoridad política nacional para su vida laboral.

Para la patronal y el gobierno la cuestión era fundamental. La industria argentina se caracterizaba por una situación de hecho que daba a las comisiones internas un amplio margen de control del proceso productivo. Éste era el legado de la posición singular del movimiento sindical dentro del peronismo y se había incorporado a los convenios colectivos firmados entre 1946 y 1948. Este poder de la base fabril impedía eficaz-

mente la implementación de nuevos ordenamientos laborales racionalizados que podían incrementar la productividad del trabajo. El intento del nuevo gobierno y de los empleadores de transformar esta situación chocó con una resistencia generalizada de los trabajadores, arraigada en el desarrollo de una cultura fabril específica durante la era peronista. Esa cultura traducía la nueva posición social y política de los trabajadores dentro de la sociedad argentina en una serie de supuestos y afirmaciones concernientes a lo que la patronal podía y no podía demandar legítimamente a su personal. Para los trabajadores, las prácticas y disposiciones que los empleadores y el Estado ahora consideraban tan objetables eran una salvaguardia crucial de la calidad de vida en las fábricas. Como tales, eran emblemáticas de un aspecto decisivo del significado de la experiencia peronista para la clase obrera: la letra menuda de la realidad cotidiana que subyacía a las abstracciones más vagas de la retórica justicialista.

Para defenderse a sí mismos del ataque contra los sindicatos y las condiciones fabriles, los trabajadores iniciaron el proceso de reorganización espontánea y localizada que la cultura política peronista llegaría a conocer como “la resistencia”. Frecuentemente cimentada en comités de base extraoficiales y con una diversidad de formas de accionar que iban desde el sabotaje hasta las huelgas salvajes y el trabajo a desgano en distintos sectores, esta lucha confirmó la dominación peronista de la clase obrera. Cuando el gobierno convocó a elecciones para reconstituir las comisiones internas a fines de 1956, en la mayoría de los casos fueron elegidos delegados peronistas.

No hubo, entonces, un momento de vacilación en lo que se refiere a la lealtad al peronismo. Ni socialistas ni comunistas pudieron desafiar eficazmente esa fidelidad. El gobierno de Aramburu y Rojas, con sus ataques a las comisiones internas, su generalizado revanchismo en la base fabril y la ofensiva contra las condiciones laborales, expresaba con mucha claridad para los trabajadores lo que estaba en peligro de perderse y el contraste con la época de Perón. De ese modo, reforzaba la identificación de Perón y el peronismo con las experiencias obreras concretas.

Las luchas defensivas de 1956 y 1957 pusieron en primer plano una nueva camada de dirigentes gremiales más jóvenes

que llenaron el vacío generado por la proscripción de la generación anterior a 1955. Esta nueva generación tenía estrechos lazos con las bases y disfrutaba del prestigio que se desprendía de la dureza y las penurias del activismo sindical en esos años.

Dos serían los principales desafíos que estos dirigentes enfrentarían en 1957 y 1958. El primero era negociar eficazmente con la patronal y las autoridades nacionales, para lograr expandir y consolidar los espacios institucionales que se les concedían a regañadientes. Hacia fines de 1956 varios sindicatos volvían a estar a cargo de gremialistas peronistas luego de celebrar elecciones; otros se les sumarían en 1957, cuando el régimen terminó por reconocer la inevitabilidad de una constante y fuerte presencia peronista. Algunos de los gremios normalizados, tanto peronistas como no peronistas, formaron la Comisión Intersindical a principios de 1957. Este organismo convocaría a varias importantes huelgas en el transcurso de ese mismo año. Más adelante, siempre en 1957, el interventor militar de la CGT llamó a un congreso normalizador. Los socialistas y otros antiperonistas controlaban sindicatos como los

“Instrucciones Generales Para los Dirigentes” del Comando Superior Peronista

“Plan de Acción

“La idea operativa es la siguiente:

- ”1. Resistencia civil por las fuerzas cívicas y sindicales organizadas.*
- ”2. Mientras se realiza la resistencia, debe activarse la organización y perfeccionar lo existente en forma que (...) la resistencia se extienda a todo el país.*
- ”3. Cuando el desgaste sea suficiente y la organización adecuada se paralizará el país, tentando una decisión final.*
- ”4. Para el caso de que aun paralizado el país, la canalla resistiera (...) deben irse preparando los medios para descargar la guerra de guerrillas en todas partes. Para esa ocasión debe contarse con las fuerzas del Ejército, Gendarmería, Policía, etc., que se encuentren en acuerdo con nosotros (...)”*

Fuente: Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2.

de empleados de comercio, bancarios, personal civil de la nación y empleados municipales. Cuando estos gremios se vieron en minoría, abandonaron el congreso y constituyeron los 32 Gremios Democráticos. Los restantes sindicatos, peronistas en su abrumadora mayoría, formaron entonces las 62 Organizaciones. La creciente división de la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas, que el régimen militar había esperado convertir en cosa del pasado, encontraba de ese modo expresión institucional dentro del movimiento sindical. Las 62 Organizaciones representaron para los gremialistas peronistas la primera organización justicialista completamente legal desde el derrocamiento de Perón, y la utilizarían para coordinar su accionar y presionar al gobierno tanto en el campo sindical como en la esfera política más general. En rigor de verdad, éste era precisamente el segundo gran desafío que enfrentaba la nueva generación de dirigentes gremiales.

El término “resistencia”, que fue un punto crucial de referencia en la cultura política peronista, significaba algo más que la mera alusión a la defensa de las condiciones y la organización dentro de las fábricas. En el folclore del movimiento, la resistencia fabril estaba estrechamente asociada a la resistencia en otros terrenos. En la conciencia popular peronista la resistencia evocaba un conjunto diverso de respuestas que iban desde la protesta individual, a través del sabotaje personal y actividades clandestinas más organizadas, hasta el intento de levantamientos militares. La meta última de esta gama de acciones se sintetizaba en la consigna “Perón vuelve”. Muchos activistas peronistas concebían la resistencia desde un punto de vista insurreccional. El exponente más consumado de esta perspectiva era el delegado personal de Perón en esos momentos, John William Cooke (véase el capítulo VIII).

Para muchos militantes, el dilema radicaba en el hecho de que el éxito mismo de la resistencia en los sindicatos estaba cambiando el contexto dentro del cual debía actuar el movimiento. El gobierno se retiraba y abría posibilidades de actividad legal dentro de las estructuras existentes. No obstante, en el movimiento eran muchos los que rechazaban esa opción táctica, porque dejaba a un lado el derrocamiento del régimen y el retorno de Perón. El punto focal de esta tensión se centró en las elecciones presidenciales convocadas para febrero de 1958.

Arturo Frondizi había cortejado abiertamente al peronismo para obtener su voto. Para los dirigentes sindicales peronistas, apoyar su candidatura era una opción con muchos atractivos. Frondizi había prometido la reconstitución de la CGT, había impulsado la convocatoria de elecciones en todos los sindicatos aún no normalizados y era partidario de la vuelta a un fuerte sistema de negociaciones colectivas basado en sindicatos nacionales centralizados, de acuerdo con la estructura existente durante el régimen de Perón. El contraste con el gobierno militar parecía evidente. Este último había emitido el decreto 9.270, que garantizaba la representación de las minorías en la conducción sindical y el reconocimiento de varios sindicatos con iguales derechos de negociación en una misma rama industrial, y había prohibido toda actividad gremial que se definiera como política.

En este contexto, el llamado de muchos sectores de la resistencia a abstenerse o votar en blanco tenía poco que ofrecer a los activistas sindicales de las 62 Organizaciones. En cambio, una victoria del candidato “no continuista”, Frondizi, contribuiría a consolidar las posiciones que habían arrancado al régimen militar. Esa fue la lógica que Perón aceptó al ordenar a sus seguidores que votaran por el candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente en las elecciones de febrero de 1958.

LOS AÑOS DE FRONDIZI: LA LÓGICA EMERGENTE DEL PRAGMATISMO INSTITUCIONAL

El gobierno de Arturo Frondizi disfrutó de una tregua inestable con los sindicatos durante sus primeros ocho meses en el poder. Las bases peronistas, en particular, habían salido del régimen militar con una confianza muy robustecida en sus propias fuerzas, fundada en su comprobada capacidad de sobrellevar la represión militar y recuperar los sindicatos. Esta elevada autoconfianza se reflejaba en una sostenida oleada de militancia. Alentados por la nueva situación institucional representada por un presidente que debía ese cargo a sus votos, los trabajadores peronistas lanzaron una cantidad creciente de huelgas. Sólo en la Capital Federal, en 1958, se perdieron más de seis millones de horas de trabajo a causa de esas medidas de fuerza.

Al mismo tiempo, Frondizi cumplió una de sus principales promesas de campaña y sancionó la ley 14.455, de asociaciones profesionales, que en muchos aspectos se basaba en el Código del Trabajo peronista. Esta ley permitía el reconocimiento de una sola entidad negociadora en cualquier rama industrial y de ese modo daba por terminado el intento del régimen de Aramburu de implementar una negociación con varios sindicatos por rama. La nueva ley también abolía la representación de las minorías en la conducción sindical, otra característica de la política gremial del gobierno militar. Se restablecía el tradicional sistema peronista por el cual la lista ganadora tomaba el control de todo el sindicato. También se autorizaba a los empleadores a retener la cuota gremial de sus trabajadores por cuenta y orden de los sindicatos. Las elecciones realizadas en muchos sindicatos de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley dieron por resultado el triunfo de las listas peronistas en todos los gremios industriales de importancia. Para terminar, Frondizi prometía el restablecimiento de la CGT una vez que se completara ese proceso electoral.

La promesa de estabilidad en el frente laboral que parecían brindar esos primeros meses se disipó rápidamente. En enero de 1959 Frondizi, luego de negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de emergencia, anunció un plan de estabilización que reducía de manera drástica las protecciones arancelarias, devaluaba el peso, aumentaba la mayoría de los precios controlados y prometía un virtual congelamiento salarial. Parte del acuerdo también implicaba la privatización del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre. La respuesta del movimiento obrero a estas medidas iba a conducirlo a una serie de encarnizadas acciones defensivas en el transcurso de 1959 y 1960. La primera de ellas fue la ocupación del mencionado frigorífico por su personal para protestar contra el decreto de privatización. De hecho, en 1959 se perdería una cantidad sin precedentes de días de trabajo a causa de las huelgas, emprendidas por los trabajadores para defenderse del impacto del plan económico de Frondizi. A corto plazo, las medidas gubernamentales envenenaron las relaciones laborales. Tanto los sindicatos peronistas como los no peronistas se encontraban en una situación desventajosa al enfrentarse con un gobierno respaldado por las Fuerzas Armadas y dispuesto a usar el poder del Estado

John William Cooke evalúa para Perón la actuación de los dirigentes sindicales ante la huelga general decretada en solidaridad con los trabajadores del Frigorífico Lisandro de la Torre

“(...) pero mantienen su gravitación los dirigentes importantes: Vandor, Olmos, Framini... el equilibrio de fuerzas y la gravitación de los dirigentes de primera categoría no parecen haberse alterado después de los episodios recientes. Vandor, detenido el día domingo de la huelga, aparece encabezando el sector más duro y tiene, además de sus méritos personales, la fuerza de contar con la solidaridad de su gremio, ratificada en una asamblea general realizada (...)”

Fuente: Carta de Cooke a Perón, 5 de febrero 1959, Perón-Cooke, *Correspondencia*, vol. 2.

para sostener su política económica. Muchos gremios volvieron a ser intervenidos durante 1959. La lucha también era desigual porque, con la aguda recesión provocada por el plan de estabilización, la posición negociadora de los sindicatos había quedado muy debilitada. El resultado fue una serie de derrotas que desmovilizaron y pusieron a la defensiva al movimiento obrero. En 1960 y 1961 la cantidad de huelgas declinó drásticamente.

Los sindicatos peronistas experimentaron estos acontecimientos como una traición. A corto plazo los sucesos señalaron, sin duda, el fin de cualquier posibilidad inmediata de implementar el programa económico desarrollista, basado en una alianza nacional policlasista con inclusión de una fuerte presencia sindical. Para muchos peronistas, la “traición” de Frondizi era una prueba de que su renuencia con respecto a la decisión original de apoyarlo estaba bien fundada. Frondizi pasaría la mayor parte del tiempo que le quedaba en el gobierno tratando de convencer a los dirigentes gremiales peronistas de su buena fe y su compromiso permanente con las ideas de desarrollo “nacional y popular”.

Es importante subrayar la complejidad de la situación que enfrentaba la mayoría de los sindicalistas —tanto peronistas

como no peronistas— en esos tiempos. Para los peronistas, en particular, el atractivo del proyecto de Frondizi había tenido dos caras. Existía, por cierto, un aspecto pragmático. La ley 14.455 era esencial para el restablecimiento de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. Había además muchas otras ventajas institucionales y prácticas que hacían al gobierno constitucional de Frondizi preferible al régimen militar precedente. De tal modo, los dirigentes gremiales se veían en la necesidad de considerar seriamente el efecto de sus acciones sobre la supervivencia del gobierno frondizista. Y estaban muy al tanto de las presiones militares antiperonistas sobre el presidente.

De igual importancia, sin embargo, era lo que podríamos llamar una afinidad ideológica subyacente entre concepciones clave del desarrollismo y ciertos dogmas fundamentales de la ideología justicialista formal. La retórica desarrollista e industrialista de Frondizi abrevaba en una tradición de larga data del nacionalismo económico argentino que incluía al peronismo. Aun la tardía adhesión del presidente a la idea de la importancia de los capitales extranjeros podía encontrar un precedente en algunas políticas de los últimos años de Perón (el contrato con Standard Oil y el acuerdo con Kaiser Industries). El desarrollismo también compartía con el peronismo ciertas concepciones básicas sobre los beneficios de la armonía social y la humanización de las relaciones entre capital y trabajo. Más específicamente, Frondizi y sus socios hacían mucho hincapié en la necesidad de que los trabajadores, a través de fuertes sindicatos independientes, cooperaran con otros “factores de poder” como la Iglesia y la patronal.

La afinidad entre elementos centrales de la filosofía desarrollista y concepciones que podían encontrarse en la ideología justicialista fue un factor crucial que apuntaló las acciones sindicales durante el gobierno de Frondizi y sus sucesores. El hecho mismo de que los sindicalistas consideraran como una “traición” las políticas del presidente en 1959 indica una persistente creencia en la eficacia de las ideas traicionadas. La búsqueda de una u otra versión de este proyecto de desarrollo iba a ser un fundamento estable de la actividad política y social de los sindicatos peronistas a lo largo de la década siguiente. Frondizi y sus partidarios argumentarían que el plan de estabi-

lización fue una necesidad temporaria y que las concesiones al capital extranjero eran imprescindibles para romper las ataduras del subdesarrollo. Consideraciones cada vez más pragmáticas llevarían a los dirigentes gremiales a dar al presidente el beneficio de la duda en esta cuestión.

Una importante minoría militante dentro del peronismo y la clase obrera se resistiría a esta lógica práctica. Apoyados en la experiencia y los valores de la resistencia, denunciaron el compromiso con Frondizi. Esta posición se sostenía de una interpretación literal y selectiva de la ideología y la experiencia peronistas que no se remontaba al Perón de los contratos con la Standard Oil sino al de la privatización de los ferrocarriles de propiedad británica. Para esta minoría militante, además, la presencia del mismo Perón tenía una significación crucial como garantía de que el Estado no sería utilizado en perjuicio de los trabajadores y la nación. Esta oposición a Frondizi no elaboró una crítica fundamental de la estrategia desarrollista. Antes bien, perduró como un rechazo moral de su impacto y los asociados a ella y una insistencia en la importancia de los criterios sociales y morales para establecer las políticas estatales.

A menudo esta oposición sindical recibía el nombre de “línea dura”. Si bien sentían que la lógica del desarrollismo los ponía cada vez más a la defensiva, los “duros” conservaron una mayoría formal dentro de las 62 Organizaciones durante los años de Frondizi. Sostenidos por la aspereza misma de las luchas de 1959 y 1960 y con frecuencia representantes de sindicatos particularmente afectados por la aguda recesión de 1960 y 1961, denunciaban con pasión a Frondizi. La línea dura creía que la participación en la negociación, el compromiso y la defensa de lo que se veía como una apuesta por el sistema implicaría inevitablemente la postergación para algún vago futuro de las aspiraciones fundamentales que habían sido la base de la lucha obrera desde 1955, sobre todo la vuelta de Perón. En rigor de verdad, la política de Frondizi, expuesta sin tapujos, consistía precisamente en divorciar a Perón del movimiento y en especial de su rama gremial. En definitiva, la solución que proponían los duros para contrarrestar esta amenaza era una insistencia en las virtudes subjetivas de la dureza, la intransigencia y la lealtad y en la fidelidad a quienes habían lu-

chado y sufrido y sobre todo a Perón. La línea dura era, en última instancia, más un estado de ánimo que una posición política articulada, y esto dio a un núcleo militante del sindicalismo peronista la capacidad de sobrevivir a la desilusión de los años siguientes.

La lógica del pragmatismo terminó por imponerse. El período posterior a 1959 se caracterizó por el crecimiento de cierta resignación y desmovilización que iba a ser el telón de fondo de un proceso de burocratización de los sindicatos. Esto implicaba un cambio en la relación entre los dirigentes y las bases y en las actitudes de los propios líderes sindicales. Varios factores explican este proceso. Muchos activistas estaban desocupados e incluidos en listas negras; otros simplemente habían abandonado la actividad gremial. Quienes persistían comprobaban a menudo que sus sindicatos eran lugares crecientemente hostiles. La democracia interna de facto que había caracterizado en general la lucha sindical luego de 1955 comenzaba a cambiar de manera dramática. El fraude electoral era cada vez



Delegación argentina a la reunión de la OIT. Desde la izquierda, Augusto Vandor (con bolso de mano blanco), Francisco Pérez Leirós, Guillermo Acuña Anzorena, ministro de Trabajo, Riego Ribas, Juan Carlos Loholaberry, José Alonso, Luis Angeleri y Máximo Castillo, 5-6-1961.

más frecuente. Ahora, las conducciones gremiales nacionales también ejercían un control mucho más férreo sobre los dirigentes fabriles locales. Este tipo de control estaba acompañado por la purga de activistas de base. Los convenios firmados en 1960 y 1961 formalizaron esa creciente autoridad de la organización sindical en el nivel de las plantas. Los sindicatos firmantes de dichos convenios aceptaban muchas de las restricciones a la actividad de las comisiones internas en la base fabril que la patronal había procurado implementar durante el gobierno de Aramburu.

En parte, este proceso se fundaba en cierto grado de corrupción personal. En este período aumentaron las oportunidades de enriquecimiento o simplemente de una vida más cómoda. En una carta a Perón, John William Cooke comentaba que “de ahora en adelante habrá más represión, más cárcel, más cachiporrazos. Pero también habrá más dinero y facilidades para quienes quieran llegar a algún arreglo con el gobierno. En todos los ámbitos el objetivo será debilitar al peronismo por medio de una integración práctica”. Pero el efecto de la corrupción personal en su sentido más literal no debe exagerarse. La mayoría de los dirigentes ahora tentados por esa “integración práctica” había surgido muy poco tiempo atrás de las luchas fabriles contra el régimen militar. No estaban separados de los activistas por años de disfrute de privilegios burocráticos. Augusto Vandor, el líder de los metalúrgicos, había dejado la planta de Philips apenas cinco años antes. A decir verdad, activistas y dirigentes compartían una experiencia común en la resistencia a los militares y a Frondizi. Los activistas reconocían en los líderes a hombres como ellos, con los mismos antecedentes, aspiraciones y debilidades. Además, muchos activistas locales formaban parte ahora de las jerarquías sindicales.

La lógica de cierta avenencia era difícil de resistir. Los militantes peronistas se enfrentaban a la realidad de que a mediados de 1960 la opción insurreccional era una ilusión. El Plan CONINTES instaurado a principios de ese mismo año destruyó eficazmente la estructura clandestina de la resistencia peronista.

Al mismo tiempo, Frondizi ofreció oportunidades institucionales más concretas a los sindicatos. Además de los contratos de negociaciones colectivas firmados en 1960 y 1961, que

condujeron a la primera renegociación general de los convenios desde principios de la década del 50, el presidente también tomó algunas medidas para cumplir su antigua promesa de devolver la CGT. En 1961, las 62 Organizaciones aceptaron compartir el poder con los no peronistas en una comisión de veinte miembros encargada de convocar un congreso reorganizador.

El pragmatismo institucional presentaba sus propios desafíos a los dirigentes sindicales. El papel cumplido por los sindicatos peronistas empezaba a mostrar numerosas facetas. Por un lado, era evidente que los gremios tenían que representar las necesidades institucionales de sus organizaciones y los intereses económicos de sus afiliados. Esto implicaba negociar con la patronal, el Estado y los sindicatos no peronistas. Al mismo tiempo, los gremios se habían convertido en la principal expresión del peronismo en la Argentina y, como tales, tenían a su cargo la negociación de las demandas del movimiento con otros actores del sistema político institucional. La proscripción legal del justicialismo político no hacía sino reforzar esta tendencia. Por último, los dirigentes sindicales debían negociar *dentro* del peronismo con otros sectores del movimiento. Luego de 1960, esto significaba esencialmente dos cosas. Por una parte, tratar con el conjunto de partidos neoperonistas que habían surgido con la intención de reclamar el legado político asociado al voto peronista. También significaba tratar con las diversas figuras políticas y organismos oficiales designados por Perón en diferentes momentos para hablar en su nombre y representar las necesidades políticas del movimiento.

La primera prueba real de la capacidad de los dirigentes sindicales para desempeñar eficazmente esos múltiples roles se produjo en las elecciones de mitad del mandato presidencial, en marzo de 1962. Dentro de la dirigencia sindical prevalecía la idea de que el peronismo debía intentar presentar sus propios candidatos en vez de seguir recurriendo a la táctica del voto en blanco de elecciones anteriores. Cualquier campaña justicialista dependería indudablemente de la capacidad de los sindicatos de movilizar a su electorado peronista. La pregunta crucial era quién sería el principal beneficiario de las recompensas. Las figuras del justicialismo político esperaban convencer a los sindicatos y a Perón de la necesidad de dar los

votos a los partidos neoperonistas. Los propios sindicatos estaban decididos a imponer una mayoría de candidatos de su sector. Aún más importante, el líder de los trabajadores textiles, Andrés Framini, iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El propio Perón era, a lo sumo, ambivalente con respecto a esta perspectiva. Una campaña electoral exitosa apoyada en los sindicatos confirmaría a éstos como un sector con poder de negociación dentro de la política argentina y los mostraría hasta cierto punto independientes de su control.

Para terminar, los sindicatos debían ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de su intervención directa en esa campaña. El propio Frondizi apostaba sin duda a limitar el éxito de cualquier participación peronista. Esto dejaría a los sindicatos, en particular, con pocas alternativas salvo seguir adaptándose a los movimientos del presidente. Éste advertía las probables implicaciones que tendría una victoria peronista en lo tocante a la respuesta de las Fuerzas Armadas. En rigor, contaba con esta amenaza implícita para convencer a los gremios de que no presentaran sus candidatos. A su juicio, los sindicatos también debían comprender lo que podrían perder si su participación electoral provocaba una respuesta militar.

Se trataba de un juego complejo, pero en definitiva los líderes sindicales de las 62 Organizaciones consideraron las elecciones como una oportunidad única para confirmar el peso del gremialismo tanto dentro del peronismo como en el sistema político argentino. Aun si los resultados de los comicios indu-



Andrés Framini se dirige al plenario de la CGT de La Plata para leer el mensaje que se proponía dirigir al pueblo de la provincia de Buenos Aires en carácter de gobernador. A su lado, Augusto Vandor y atrás Vicente Solano Lima, marzo de 1962.

cían a los militares a intervenir, los sindicatos se habrían establecido como una fuerza con la cual estaría obligado a negociar cualquier nuevo régimen. También otros cálculos entraban en sus consideraciones. Es indudable que la línea dura juzgaba la participación en las elecciones como una forma potencial de deponer a Frondizi. En las bases peronistas había asimismo un profundo deseo de votar candidatos justicialistas como un modo de protestar contra el gobierno frondizista. El resultado de los comicios fue una resonante victoria peronista; sus candidatos ganaron ocho de las catorce gobernaciones en juego, incluida la de la provincia de Buenos Aires. Frondizi anuló de inmediato las elecciones e intervino esas provincias, pero esto no fue suficiente para salvar su presidencia. El 29 de marzo, con apoyo militar, juró como primer mandatario el presidente provisional del Senado, José María Guido, que a continuación formó un gabinete decididamente antiperonista.

Las elecciones de marzo demostraron con claridad el nuevo estatus del sindicalismo peronista. Dentro del movimiento justicialista habían logrado imponer sus candidatos a otros sectores. En términos más generales, la expresión política de la clase obrera peronista estaría ahora muy atada al movimiento sindical. El líder que surgió de la campaña electoral como figura dominante dentro del sindicalismo peronista —y por extensión dentro del peronismo en su conjunto— fue Augusto Vandor. Como jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más poderoso del país, había sido en gran medida responsable de la organización de esa campaña. La victoria en las elecciones había sido posible gracias a la infraestructura y los recursos económicos provistos por la UOM y otros sindicatos peronistas. En la prensa y en el movimiento sindical, tanto amigos como enemigos comenzaban a utilizar con creciente frecuencia el término “vadorismo”.

LOS AÑOS VANDORISTAS: APOGEO DE LA BUROCRACIA SINDICAL

Augusto Vandor llegó a simbolizar el proceso de integración del aparato sindical al sistema político institucional argentino y su corolario de burocratización y uso creciente de métodos

autocráticos para controlar la vida interna de los sindicatos. El término “vandorismo” se convirtió en sinónimo de negociación, pragmatismo y aceptación de la *Realpolitik* que gobernó la sociedad y la política argentinas luego de 1955. Para los comentaristas políticos y el público en general, Vandor personificó la transformación del peronismo y sus sindicatos, que pasaban de una postura de franco antagonismo con respecto al statu quo posterior a 1955 a una actitud de aceptación de la necesidad de acomodarse a él y encontrar un espacio dentro de sus límites. Políticamente, el vandorismo implicaba el uso del poder y la representatividad que los sindicatos debían a su posición de fuerza dominante dentro del peronismo —como único sector plenamente legal dentro del movimiento— a fin de negociar con otros “factores de poder”.

En términos mediáticos, la imagen de poder e influencia dentro del sistema se simbolizaba en las frecuentes conversaciones entre dirigentes gubernamentales y sindicales sobre cuestiones económicas y sociales. En un nivel informal, esta situación era reforzada por la reproducción constante de las abundantes consultas entre Vandor y sus compañeros de la conducción sindical y políticos, dirigentes empresariales, sacerdotes y jefes militares. La imagen de un Vandor en mangas de camisa y sin corbata que, en su carácter de dirigente sindical, entraba a la Casa Rosada o al Ministerio de Defensa, iba a convertirse en el elemento dominante del imaginario político de la Argentina de esa época. Continuamente reiterada por los medios, esta representación contribuyó a fortalecer la percepción de los sindicatos peronistas como una parte fundamental del sistema social y político. A su turno, los dirigentes gremiales se apresurarían a hacer suya esa imagen.

Había otras maneras de definir el vandorismo, menos neutrales desde el punto de vista emocional. Su lado más oscuro también era objeto de la atención. En este caso, la imagen proyectada recordaba el modelo de gangsterismo sindical norteamericano asociado a personajes como Jimmy Hoffa. También suscitaba la evocación del siniestro conspirador que intrigaba con potenciales golpistas en los pasillos del poder. Para los adversarios de Vandor en el movimiento sindical —los duros a quienes había marginado de las 62 Organizaciones— y para aquellos que, dentro del movimiento en su conjunto, aún acu-

dían a personas como John William Cooke en busca de orientación estratégica, el líder metalúrgico llegó a personificar la traición al espíritu de la resistencia y la esencia de un peronismo obrero radical. Esta concepción sobreviviría al apogeo del poder del líder metalúrgico y encontraría expresión en una nueva generación de activistas peronistas más jóvenes que ingresarían en grandes oleadas al movimiento a fines de la década de 1960. También tendría vigencia en las formaciones guerrilleras responsables de su asesinato el 30 de junio de 1969.

La versión más atrapante de esta visión del vandorismo fue la expresada por el escritor Rodolfo Walsh. Éste investigó un tiroteo producido en 1966 en la pizzería La Real, en Avellaneda, entre un grupo de activistas peronistas y un grupo de dirigentes de la UOM, incluido el propio Vandor. El violento enfrentamiento causó la muerte de dos de los activistas y de uno de los protegidos de Vandor, el joven líder metalúrgico Rosendo García. Walsh utilizó la investigación de este incidente para lanzar una denuncia más general sobre la naturaleza del vandorismo tal como actuaba en la UOM y había afectado la vida de militantes como Domingo Blajaquis, Raimundo Villaflor, su hermano Rolando y su compañero Juan Granato, todos ellos víctimas —sostendría Walsh— de las maquinaciones de Vandor esa fatídica noche en la pizzería. Aún más dramáticamente, Walsh afirmaría que García, protegido del jefe de la UOM, no había muerto por las balas de los activistas sino como parte de un complot deliberado del líder sindical para eliminar a un potencial rival más joven dentro del grupo de conducción. Su visión de Vandor y el vandorismo como un ejemplo de corrupción política y moral se publicó originalmente en una serie de artículos periodísticos, luego aparecidos como libro con el título de *¿Quién mató a Rosendo?*, que alcanzó gran circulación.

¿Cuál era entonces la base del poder de esta dirigencia sindical? En un nivel elemental, el poder de cualquier sindicato dependía en la Argentina de la facultad que la ley 14.455 asignaba al gobierno para otorgar personería gremial a un solo sindicato por rama industrial, lo cual aseguraba a éste el derecho a conducir las negociaciones en esa actividad laboral. La ley también regulaba la mayor parte de los demás aspectos del funcionamiento sindical. Si bien admitía una estructura fede-

rativa de organización gremial, en la práctica los sindicatos más grandes e importantes del país tenían estructuras sumamente centralizadas que concentraban el poder en una única dirigencia de nivel nacional. Estos sindicatos tenían un control casi total sobre las actividades de sus ramas y seccionales. En los hechos, ni siquiera los sindicatos que tenían una estructura federal formal garantizaban la autonomía de sus seccionales con respecto al control centralizado. La ley laboral autorizaba a las federaciones a imponer estatutos que disciplinaban severamente a los sindicatos afiliados y limitaban su capacidad de actuar de manera independiente de la federación. Así, la Ley de Asociaciones Profesionales no sólo garantizaba a las dirigencias gremiales el derecho a negociar, sin temer la competencia de sindicatos rivales, sino que también sentaba las bases de una estructura sindical que contribuía en mucho a asegurar el control centralizado *dentro* de un sindicato.

Otro motivo crucial del poder y la influencia de la conducción era el manejo de las finanzas. También en este caso los fundamentos procedían de la ley. Las finanzas gremiales tenían dos fuentes esenciales: la cuota sindical y la cuota asistencial, prevista para el mantenimiento de los diversos servicios sociales ofrecidos por los sindicatos. Una tercera fuente era la cuota empresarial, pagada por la patronal como un aporte a los fondos gremiales para el bienestar social. Por último, había cuotas extraordinarias negociadas en los convenios, que por lo común eran un porcentaje del primer salario quincenal pagado al comenzar un nuevo contrato. La Ley de Asociaciones Profesionales establecía un sistema de retención automática de estas diferentes cuotas, de la que se encargaban los empleadores. Dada la preponderancia de un tipo de estructura gremial centralizada, este sistema proporcionaba grandes recursos económicos a la dirigencia sindical. En términos esenciales, significaba que en los grandes sindicatos industriales y de empleados administrativos la cuota del afiliado metalúrgico de Córdoba, el trabajador de la carne de Rosario o el ferroviario de Tucumán era deducida por sus empleadores y depositada directamente en la cuenta bancaria del sindicato central en Buenos Aires. Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que el valor total de los bienes de propiedad sindical en la actividad manufacturera se calculaba en casi 600.000 millones de

pesos en 1965. El valor total de los bienes de los sindicatos ascendía ese mismo año a 4.201 billones de pesos.

En sí mismas, esas enormes sumas se asociaban, por supuesto, al gangsterismo y la corrupción cada vez más identificados con el sindicalismo peronista. La prensa oficialista y los grupos opuestos a Vandor dentro de los sindicatos ponían en circulación muchas historias sobre el desvío de esos fondos en beneficio de determinados dirigentes. Igualmente significativo, sin embargo, era el hecho de que con ese dinero se solventaba toda una gama de servicios sociales ofrecidos por los sindicatos a sus afiliados. Los fondos también facilitaban a la conducción gremial central la implementación de una política clientelista de vasto alcance. El dinero y los servicios que proveía eran la base a partir de la cual se producían las negociaciones entre diferentes sectores de la burocracia. Tenían importancia por lo que representaban en términos de puestos de trabajo, influencia y prestigio. El sistema clientelista que sustentaban en los sindicatos se basaba en una compleja red de intereses entrelazados dentro de cada gremio y en el movimiento sindical en su conjunto.

El sistema de elecciones gremiales también otorgaba a las conducciones existentes un considerable poder para descabezar los desafíos a su autoridad. La ley 14.455 instituyó una política por la cual la lista ganadora se llevaba todo. En efecto, la lista mayoritaria asumía el completo control del sindicato. En sí mismo, esto podía contribuir a aumentar la violencia que rodeaba las elecciones, dado que la lista de candidatos elegidos no sólo ocupaba todos los cargos puestos en juego sino que, una vez en ejercicio de sus funciones, procedía a instalar a sus seguidores en todo el aparato administrativo. De tal modo, cada elección implicaba también una red de oportunidades laborales. Una vez elegido un grupo, era extremadamente difícil desalojarlo, dado que la organización de los comicios ulteriores y el establecimiento de las reglas del juego tanto para los procedimientos de votación como para el reconocimiento oficial de las listas opositoras quedaban a su exclusivo cargo. El resultado era un sistema que hacía virtualmente imposible que un grupo de oposición, aunque lograra superar los obstáculos en torno de la presentación de su lista de candidatos, desplazara a las autoridades existentes por medio de elecciones.

Vandor y los otros líderes sindicales, tanto peronistas como no peronistas —que amoldaban cada vez más sus conductas a la del líder metalúrgico—, utilizaron este sistema para convertirse en decisivos interlocutores sociales y políticos dentro de la sociedad argentina. En enero de 1963 se reconstituyó formalmente la CGT. Las 62 Organizaciones tenían una clara mayoría frente a los sindicatos no peronistas. Controlaban todos los sindicatos industriales y todos salvo uno de los comités regionales de la central obrera. Hacia 1962 los 32 Gremios Democráticos, de fuerte militancia antiperonista, prácticamente habían desaparecido, mientras que la influencia comunista también estaba restringida a unos pocos sindicatos más pequeños. La mayoría de los grandes sindicatos de empleados administrativos que habían sido el núcleo de los 32 Gremios Democráticos se definía ahora como independiente. Aceptaban la realidad de la influencia peronista en el movimiento sindical y necesitaban encontrar un *modus vivendi* eficaz con ella. La CGT reconstituida representaba justamente esa posibilidad. Si bien el comité central estaba dividido en partes iguales entre peronistas e independientes, Vandor insistió con éxito en que el secretario general debía ser un peronista y colocó a miembros de esta tendencia en los puestos clave de secretario del interior y de asuntos gremiales.

El secretario general elegido con la bendición de Vandor fue el líder de los trabajadores del vestido, José Alonso. La nueva confederación afirmaba tener alrededor de 2.567.000 afiliados.

Con la recién recuperada CGT en funcionamiento y su base de poder en las 62 Organizaciones ahora consolidada, la conducción sindical peronista lanzó una campaña para buscar soluciones a las penurias económicas y sociales de sus afiliados. El gobierno de Guido había implementado un plan de estabilización similar al de Frondizi, con parecidos resultados para la clase obrera: una pronunciada recesión, alto desempleo —sobre todo en industrias tradicionales como la textil y la metalúrgica— e inflación en aumento. La primera etapa de aquella campaña culminó con el lanzamiento del llamado Plan de Lucha.

La primera fase de este plan terminó en mayo de 1963 con una semana de protesta contra la política económica del go-

bierno de Guido. Se organizó una vasta serie de acontecimientos cuya intención era fortalecer la posición del movimiento sindical como un interlocutor crucial de otros sectores de la sociedad civil. Se realizaron debates y reuniones públicas con representantes de los estudiantes universitarios, las federaciones patronales y la Iglesia, en los cuales se discutían las políticas económicas, sociales y culturales. La semana culminó con un paro general de veinticuatro horas.

Con la mejora de la situación económica en 1963 y principios de 1964, la CGT intensificó su campaña para recuperar el terreno perdido. Sus intentos de presionar al gobierno radical de Arturo Illia, que había sucedido a Guido en julio de 1963, condujeron a la implementación de la segunda fase del Plan de Lucha en mayo y junio de 1964. Esta etapa consistió en una escalada de ocupaciones de fábricas en todo el sector industrial argentino. El principal arquitecto de este plan fue Vandor, y la industria metalúrgica encabezó el número de ocupaciones. Cuidadosamente planificadas y llevadas a la práctica bajo el firme control del aparato sindical, estas medidas fueron una

La CGT explica el Plan de Lucha

“Por Qué Luchan Los Trabajadores Argentinos

”Los trabajadores luchan pues por un mundo mejor, por la conformación de una sociedad basada en la justicia social y cuyo fin sea la felicidad y el bienestar de todos los habitantes. Por la igualdad ante la ley y por la equidad necesaria para que el débil no se vea explotado. Que la única diferencia sea la capacitación, pero que tengan las mismas oportunidades y que nadie se encuentre sumergido. O sea que Capital, Gobierno, Estado y Trabajo sean puestos al servicio del hombre en la gran dimensión humanista que representa. En una palabra, que el ser humano sea el medio y el fin de toda acción.

”Por eso luchan los trabajadores (...) ante el panorama opresor (...) y como una manera y táctica de esa lucha, los trabajadores argentinos ocupan en forma pacífica las fuentes de producción y comercialización, no para utilizarlas contra el país sino para ponerlas a su servicio.”

Fuente: Declaración de la CGT, mayo de 1964, Santiago Senén González, *El sindicalismo después de Perón.*

La CGT exige un cambio de estructuras

“El avance de la ciencia y la técnica, aplicado a la solución de los problemas concretos del hombre de hoy, hace inexorable en su escala internacional una acción al respecto (...) Las tensiones sociales y políticas es reconocido que encuentran su causal verdadera en las insatisfacciones de las necesidades elementales del hombre, tanto como aquellas creadas por la civilización industrial de que formamos parte como país civilizado. El problema del subdesarrollo, entonces, es considerado como problema estratégico de primera prioridad por los países que tienen intereses económicos y defensivos en el mundo (...) La CGT sostiene la necesidad de exigir un organismo específico con participación sindical y poder de decisión al más alto nivel del Estado. Para lograr el esfuerzo concertado de la comunidad en las relaciones económicasociales, ésta sería una de las formas de participación posibles.”

Fuente: CGT, “Hacia el cambio de estructuras”, Buenos Aires, 1965.

impresionante muestra de organización y disciplina. A lo largo de cinco semanas, la CGT afirmó haber ocupado más de once mil plantas, con la participación de más de 3.900.000 trabajadores.

Con la conducción de José Alonso, la CGT asumió su papel de actor fundamental en los cruciales debates nacionales. En esos años la central obrera editó una gran cantidad de publicaciones e informes y organizó numerosas y bien publicitadas conferencias. Se crearon un departamento estadístico y una comisión de asistencia jurídica. Se restablecieron los lazos con sindicatos extranjeros y organizaciones laborales internacionales. Durante la secretaría general de Alonso, la CGT cultivó asiduamente la imagen de una central obrera avanzada y con capacidad técnica, que podía discutir científica y responsablemente el futuro de la nación. Esta postura implicaba tanto un análisis crítico de la inequidad de las estructuras económicas vigentes como una crítica de la eficacia de las formas representativas liberales. En ocasiones, esa crítica asumía una clara forma neocorporativista, ya que la representatividad de la CGT se comparaba favorablemente con la de los partidos políticos,

en cuya falta de legitimidad se hacía frecuente hincapié. Esta actitud se convirtió luego en una afirmación de la necesidad de institucionalizar esa función representativa y asegurar así al grupo social representado por la CGT —la clase obrera— el reconocimiento que merecía en las deliberaciones del Estado.

EL DOBLE JUEGO: LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JUGAR A LA POLÍTICA

La Ley de Asociaciones Profesionales daba a la conducción sindical un poder considerable. También habría que decir que era un poder ambiguo, característica que radicaba en el papel del Estado en las cuestiones del trabajo. La legislación laboral argentina otorgaba al gobierno el control de la mayoría de los asuntos internos de un sindicato. La capacidad misma de éste de negociar con la patronal dependía de que consiguiera y mantuviera la personería gremial. La ley laboral se ocupaba de



José Alonso presenta al vicepresidente, Dr. Perette, un petitorio, 1964.

todos los aspectos del funcionamiento sindical, desde la realización de elecciones hasta la contabilidad de los recursos económicos. Regulaba la frecuencia de las asambleas generales, determinaba cuáles eran los requisitos para ser delegado y establecía el plazo previo con que debía anunciarse la realización de una asamblea. Ahora bien, el uso concreto que el gobierno en ejercicio hacía de este poder era precisamente la base de las negociaciones entre los sindicatos y el Estado. Podía tratarse de un uso sutil: la tolerancia, quizá, de algunos abusos cometidos por una conducción gremial cuyos favores el gobierno estaba interesado en cultivar. De manera alternativa, podía implicar el acoso a un sindicato hostil cuya dirigencia y sus actos constituyeran un problema político para el gobierno. Dada la vasta gama de actividades gremiales cubiertas por las regulaciones laborales, el Ministerio de Trabajo siempre podía encontrar infracciones cometidas por los sindicatos si era necesario presionar a alguna conducción gremial en particular. En última instancia, ese ministerio tenía la facultad de designar a un interventor que se hiciera cargo del funcionamiento cotidiano de un sindicato o cancelar una personería gremial. A su turno, las consecuencias de estas medidas eran calamitosas desde el punto de vista sindical. Sin personería no era posible cobrar las cuotas, lo cual tenía un efecto inmediato sobre los servicios sociales y las tareas administrativas básicas del sindicato y amenazaba todo el sistema clientelista y de empleo.

El hecho de que una parte tan grande del funcionamiento sindical normal estuviera sujeta a esa estrecha supervisión potencial del gobierno de turno implicaba una inevitable “politización” de los asuntos gremiales en la Argentina. Obligaba a los líderes sindicales a interesarse en el carácter del gobierno nacional: su actitud potencialmente amistosa u hostil hacia ellos. Por sí mismo, éste era un factor importante que contribuía a explicar el proceso de “integración” sufrido por los sindicatos peronistas en esos años; en efecto, inducía vigorosamente a la conducción sindical a adoptar un realismo pragmático. Sin embargo, vale la pena señalar que ello no implicaba simplemente la vulnerabilidad de los sindicatos. La situación era bilateral. El gobierno, resuelto a ampliar su control legal de los gremios, podía chocar con la determinación sindical de

procurar su desplazamiento del poder. En marzo de 1966 el gobierno de Arturo Illia promulgó el decreto 969, modificatorio de la Ley de Asociaciones Profesionales. La disposición representaba un ataque en toda la línea contra las facultades de la dirigencia sindical, ya que imponía reglas exigentes en beneficio de la democracia interna, debilitaba la capacidad financiera de las centrales gremiales y también restringía el uso de sus fondos para lo que llamaba propósitos abiertamente políticos. Enfrentados a semejante ataque estratégico al centro del poder sindical, los gremios peronistas replicaron del mismo modo. Gran parte de sus negociaciones con figuras militares en las últimas etapas del gobierno de Illia y su intransigente hostilidad hacia él deben verse bajo esa luz.

Los sindicatos peronistas también cumplían una función más específicamente política que se deducía de su papel como principal fuerza organizadora del movimiento justicialista en su conjunto. Esto implicaba su participación en lo que se ha llamado el “doble juego”, consistente en representar a sus afiliados en la lucha por las demandas económicas y al movimiento peronista en sus conflictos y maniobras con otras fuerzas políticas argentinas. Este doble juego había sido claramente visible en las elecciones de marzo de 1962. En los años siguientes serían cada vez más notorios la tensión y el conflicto que este papel generaba dentro del movimiento justicialista y en las relaciones con el propio Perón. La tensión se centraba en el intento de la conducción sindical que rodeaba a Vandor de afirmar su dominación del movimiento peronista e institucionalizarla en una expresión política aceptable para las otras fuerzas actuantes en el sistema político argentino. Perón estaba resuelto a contrarrestar este desafío implícito a su posición como autoridad última y exclusiva del movimiento que llevaba su nombre. Entre 1962 y 1966 Perón realizaría esfuerzos sistemáticos por imponer en la Argentina una multitud de instituciones políticas peronistas que le respondieran directamente y limitaran la autonomía política del sector gremial.

Por lo común, se ha dicho que el proyecto vandorista implicaba la construcción de un partido obrero. Esto significaba la constitución de un partido político basado en los sindicatos, según el modelo de los partidos laboristas y socialdemócratas europeos. Sin lugar a dudas, ese proyecto podía reivindicar

ciertas raíces históricas dentro del peronismo, particularmente la creación del Partido Laborista en 1945. En algunos aspectos no era más que un desarrollo de la posición de facto en que se encontraron los sindicatos luego de 1955. El propio Vandor no tenía, en verdad, demasiados deseos de teorizar este proyecto. El dirigente sindical Miguel Gazzera, uno de sus íntimos colaboradores, señaló que aquél “estaba más interesado en los detalles planteados por una oportunidad determinada que en cuestiones de estrategia general”.

Para Vandor, el problema fundamental en juego no era una cuestión filosófica sobre la representación laboral sino, antes bien, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Si en sus relaciones con el Estado y otros “factores de poder” los sindicatos tenían que afirmar su derecho a actuar más allá de la esfera estrictamente económica de las negociaciones colectivas, también debían plantear una pretensión de hegemonía dentro del movimiento justicialista. Esta pretensión chocaba tanto con los grupos neoperonistas como con el ala política oficial del movimiento. Por otra parte, también significaba una demanda al menos implícita de independencia relativa con respecto al mismo Perón. Si realmente eran la “columna vertebral” del movimiento, como Perón nunca se cansaba de repetir, debían tener la libertad de determinar la táctica en la Argentina y negociar su propio destino.

En una conferencia de las 62 Organizaciones celebrada en Avellaneda en octubre de 1965, los delegados vandoristas reafirmaron su “voluntad de promover la institucionalización del movimiento”. Esto implicaría la creación de un partido político legal organizado de abajo hacia arriba “de una manera limpia e internamente democrática”. Era evidente que en un partido cuyos dirigentes fueran elegidos en un congreso nacional el papel de Perón sería limitado, dado que las decisiones políticas capitales dejarían inevitablemente de estar en sus manos.

Vandor era un astuto jugador del doble juego. En las elecciones de marzo de 1965, utilizando fórmulas partidarias neoperonistas, el sector sindical llevó al peronismo a una notable victoria. En la Cámara de Diputados había ahora un bloque peronista de facto constituido por cincuenta y dos miembros. En las provincias fueron elegidos más de ciento cincuenta diputados peronistas. En total, las listas justicialistas obtuvieron

más de tres millones de votos. Paulino Niembro, un dirigente de la UOM y estrecho allegado de Vandor, encabezó el bloque peronista en el Congreso, como un símbolo del poder sindical y su posición dominante en el movimiento.

No obstante, el poder político que incluso un jugador tan astuto como Vandor podía extraer del doble juego también tenía claros límites. El hecho de ser los principales representantes políticos de Perón confería a los líderes sindicales cierta autoridad frente a las bases y una reserva esencial de apoyo que los fracasos en el campo estrictamente económico tal vez les habrían negado. Cada visita a Madrid podía utilizarse para contrapesar una huelga perdida o un mal convenio firmado. Al mismo tiempo, su capacidad de movilizar a la clase obrera en nombre de Perón era un arma importante que podían emplear para presionar al gobierno de turno con el fin de obtener beneficios económicos concretos. La línea divisoria entre las movilizaciones por reivindicaciones de rutina y las maniobras políticas se desdibujaba constantemente y era casi imposible de definir. Las ocupaciones fabriles de 1964, por ejemplo, respondieron a una genuina demanda de soluciones económicas pero también pretendían demostrar a los militares tanto la debilidad del gobierno de Illia como el poder correspondiente de los sindicatos. Las Fuerzas Armadas se convencerían así de la necesidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia gremial en caso de que planificaran un golpe, o bien de dejar a un lado sus objeciones a la participación electoral peronista, con el argumento de que la intervención en el proceso político disiparía el poder social militante desplegado en las ocupaciones de fábricas.

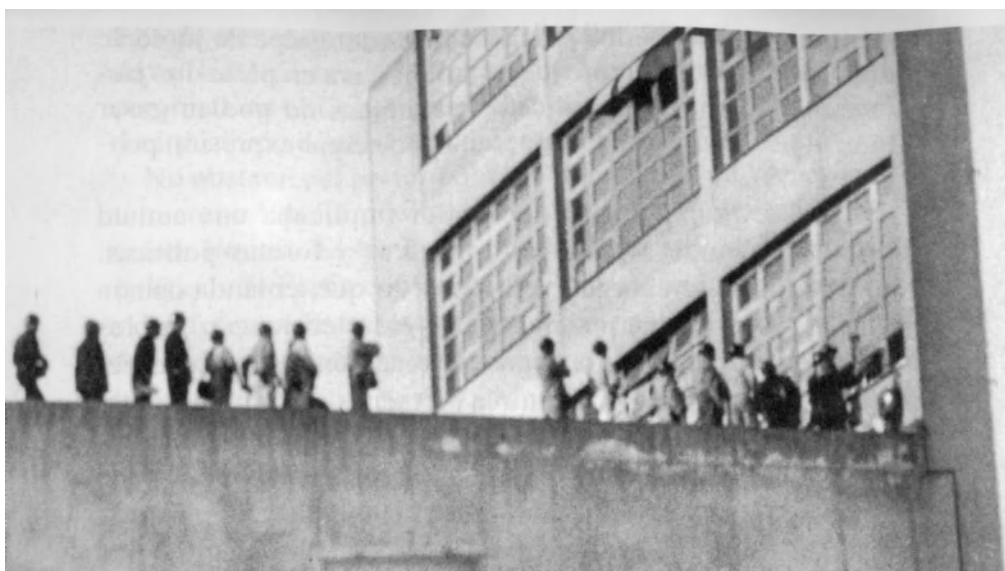
También podría aducirse, sin embargo, que la participación en este juego terminaba por ser desgastante para la conducción vandorista. En un marco institucional dominado por la dicotomía a favor de Perón/contra Perón, los sindicatos no podían estirar hasta donde quisieran la cuerda negociadora de la movilización peronista y la participación en las elecciones sin que las Fuerzas Armadas intervinieran y desbarataran el juego de amenazas y contraamenazas, instaurando un régimen menos expuesto a la presión sindical. Así, por ejemplo, los triunfos peronistas en las elecciones de 1965, motorizados por el sector gremial, y su probable victoria en las elecciones de 1967 entra-

ron en los cálculos de los planificadores del golpe de junio de 1966. Por lo tanto, el doble juego también era en parte un “juego imposible” que los sindicatos peronistas no podían ganar debido al hecho mismo de que eran la principal expresión política de Perón.

El célebre pragmatismo de Vandor implicaba una actitud oportunista cuando se trataba de tácticas y formas políticas. Los vandoristas se enorgullecían de decir que tenían la opción táctica de alcanzar el poder a través de elecciones o, si los triunfos electorales provocaban una reacción militar, encabezar la resistencia popular contra la dictadura castrense. En realidad, sin embargo, no se hacían ilusiones sobre las dificultades que los regímenes militares les planteaban en términos de negociación política. La lógica les indicaba la preferencia por la política electoral, por mucho que denostaran la ilegitimidad de la política partidaria tradicional en la Argentina. La conducción sindical era muy consciente de que su capacidad de alcanzar el poder y ejercer influencia dentro del sistema político provenía de su aptitud de movilizar a sus afiliados: en términos políticos, como delegados de Perón en la Argentina, y en términos más específicamente gremiales, como organizadores del movimiento obrero. Por definición, la vigencia de un sistema electoral —aunque restringiera el acceso peronista— les daba el mayor campo de acción para ejercer presiones y negociar.

También es importante advertir que su poder de negociación, desde un punto de vista político, procedía más de su posición como representantes de Perón ante las masas que de una capacidad negociadora autónoma debida a su actividad sindical y derivaba, en última instancia, del nombre del jefe del movimiento. Éste era una fuente de fortaleza pero también de debilidad porque, en definitiva, la dirigencia gremial no tenía la posibilidad de controlar la principal arma de negociación con que contaba.

El uso de la “camiseta” peronista les daba un margen considerable de maniobra y cierta independencia en sus tratos con Perón y los gobiernos, pero no era equivalente a negociar políticamente desde una posición de fuerza sindical autónoma. La conocida observación de Vandor de que “si dejara la camiseta perdería el gremio en una semana” era un reconocimiento rea-



Bomberos tratan de entrar a la fábrica Philips para desalojar a los obreros que ocupan el establecimiento siguiendo el Plan de Lucha de la CGT, 1964.

lista de esa situación. Cuando la independencia de los dirigentes sindicales se convertía en una amenaza, Perón podía recordarles la naturaleza relativa de su poder. Dentro del sector sindical siempre había rivales que él podía movilizar para contrarrestar a Vandor, como lo hizo a fines de 1965 cuando Alonso y otros leales se separaron de éste y fundaron una entidad rival, las 62 Organizaciones de Pie Junto a Perón.

Así, Perón y los líderes sindicales estaban atrapados en un círculo vicioso. Dada la índole de la situación posterior a 1955, aquél estaba obligado a apoyarse primordialmente en los sindicatos como su principal herramienta de negociación y afirmación de las pretensiones peronistas dentro del sistema político. Al mismo tiempo, el éxito que los sindicatos alcanzaban al cumplir este papel, la confianza que obtenían con él y el impulso que los triunfos daban a su base organizativa planteaban inevitablemente un desafío a la capacidad de Perón de determinar el destino del movimiento. Ésa fue la tensión que se exteriorizó en la disputa entre el líder justicialista y Vandor en torno de las elecciones de 1965 en Mendoza (véase el capítulo I). El triunfo del candidato de Perón sobre el vandorista oficialmente designado, Alberto Serú García, mostró los límites

de la independencia del poder político sindical y su imposibilidad de crear un partido basado en los sindicatos que relegara a Perón al papel de una mera figura decorativa.

¿Qué podemos decir, entonces, de la imagen que Walsh tenía del vanderismo? Indudablemente, los sindicatos iban a ser territorio cada vez más hostil para los activistas de base que trataban de criticar y oponerse a la conducción gremial. El uso de matones y de la “barra” para intimidar y reprimir a potenciales adversarios era un hecho cotidiano de la vida del vanderismo. Pero no era ésta la única forma de exclusión practicada en los sindicatos. Aunque las mujeres tenían un peso creciente dentro de la fuerza laboral argentina, estaban virtualmente ausentes de los organismos directivos del movimiento sindical. Aun en sindicatos con una significativa concentración de trabajadoras, como los textiles, encontramos a muy pocas de ellas en los cuerpos representativos del gremio por



Augusto Vandor y a su lado Serú García durante el proceso electoral de Mendoza, 1965.

encima de la base fabril. Éste no era, por supuesto, un rasgo exclusivo del vandorismo. El mundo del activismo peronista, tanto sindical como político, tanto entre los duros como entre los vandoristas, era un territorio abrumadoramente masculino. A pesar de que las actitudes concernientes a los papeles apropiados para las mujeres en la cultura en general (véase el capítulo VII) comenzaban a cambiar en la década del 60, el activismo gremial siguió teniendo un fuerte contenido de género y se definía en términos de códigos masculinos de fuerza, valentía y compañerismo. En este aspecto, no había diferencias entre los sindicatos vandoristas e independientes.

La imagen del vandorismo que se difundió en la década del sesenta tenía dos componentes conexos. Uno se basaba claramente en el estilo represivo de gobierno interno de la conducción gremial. El otro se centraba en el proyecto integracionista de esta dirigencia para forjarse un espacio como agentes de poder del peronismo dentro de un statu quo que en última instancia excluía a la persona de Perón. Ambos estaban evidentemente ligados y fue esa conexión la que motorizó la oposición a la jerarquía sindical, ya fuera entre los duros de mediados de los años sesenta o entre las formaciones de la juventud y la guerrilla peronistas de fines de esa década y principios de la siguiente, fuertemente influenciadas por la visión crítica de autores como Walsh. Su oposición se nutría de una impresión de afrenta y ultraje morales. No obstante, podría decirse que en definitiva la lógica del “pragmatismo institucional” era ineludible tanto para dirigentes como para dirigidos dentro del movimiento sindical. Por otra parte, y en oposición a la imagen ampliamente difundida del vandorismo, también podría argumentarse que, como política, la integración fue notable no por el poder que brindó a los líderes gremiales peronistas sino por sus resultados relativamente magros. Es fácil exagerar los resultados de las consultas entre la CGT y las organizaciones patronales. La armonía de clases seguía siendo un objetivo retórico, pero en realidad las relaciones entre sindicatos y empleadores estaban lejos de ese ideal armonioso. En una situación económica que luego de 1955 fue testigo de frecuentes ataques contra los salarios y las condiciones laborales, Vandor y sus compañeros de la conducción sindical eran muy conscientes de la necesidad de ser vistos como adversarios de la

patronal y el Estado en esta cuestión fundamental. Por lo demás, el doble juego los obligaba a estar en condiciones de movilizar a sus afiliados cuando fuera necesario con el fin, por lo menos, de mantener su credibilidad como una fuerza que los otros “factores de poder” debían tener en cuenta.

En el plano de las relaciones entre el Estado y los gremios, también es posible argumentar que, a despecho del notorio mayor peso de los sindicatos peronistas dentro del sistema social y político, había una marcada falta de expresiones formales e institucionalizadas de colaboración entre ambos campos. Pese a sus charlas con los generales y su afable familiaridad con los presidentes, la influencia de los sindicatos peronistas en los centros de decisiones de la nación era reconocida a regañadientes y estaba estrictamente limitada por la restringida tolerancia a todo lo que fuera peronista y obrero. Un whisky con el ministro de Trabajo era, en última instancia, un pobre sustituto de unas auténticas instituciones de integración. La delgada línea por la que caminaba cualquier líder gremial entre integración y oposición era aún más delgada debido a las magras ganancias reales que podían hacerse en este período. La frustración ocasionada por un sistema que proponía la fachada y el potencial de la integración sin su sustancia permitió a la conducción sindical peronista gozar de cierta tolerancia hacia sus aspiraciones políticas y económicas y era a la vez un reaseguro de que nunca iba a aprovechar el poder que le otorgaba esa tolerancia. Eso la llevó a recibir con beneplácito el final de ese juego desgastante, al que puso término el golpe militar de junio de 1966.

LOS DIRIGENTES SINDICALES PERONISTAS Y LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

En un comienzo, la conducción sindical había recibido con muchas esperanzas el nuevo régimen del general Juan Carlos Onganía. El apoyo mayoritario que dieron al golpe de junio se basaba en una profunda antipatía hacia el gobierno de Illia, que consideraban ilegítimo y hostil a sus necesidades. Por otra parte, simpatizaban con figuras militares como Onganía, que aparentemente compartía sus ideas sobre las soluciones reque-



*Asunción del general Juan Carlos Onganía.
Entre la concurrencia, Augusto Vandor.*

ridas por los problemas argentinos. Sus frecuentes contactos con muchas de las figuras que estaban detrás del golpe en los meses previos a su ejecución, junto con el peso de la presencia gremial en la sociedad argentina, parecían asegurarles un acceso privilegiado a las nuevas autoridades públicas. Según sus cálculos, un régimen militar también reduciría seriamente la capacidad de maniobra política de Perón y su ejercicio de la autoridad a expensas de la dirigencia sindical. Al cabo de un año, estos cálculos, aunque muy plausibles, se revelarían como ilusiones en su confrontación con un régimen extremadamente autoritario resuelto a lograr a cualquier precio la racionalización de la economía y la modernización del Estado (véase el capítulo II).

El régimen militar hizo dos cosas que socavaron el poder de la jerarquía sindical. En primer lugar, suspendió toda actividad y organización políticas. De ese modo esperaba abolir el complejo sistema de negociaciones políticas a través de las cuales

los grupos sociales antagónicos intentaban lograr que el Estado satisficiera las demandas de sus integrantes. Ahora bien, una de las premisas centrales del proyecto vandorista había sido precisamente la aplicación eficaz de la presión sindical peronista en un sistema político caracterizado por la existencia de gobiernos débiles y adversarios políticos divididos. Al suprimir la capacidad de negociación política de los grupos sociales, el régimen de Onganía esperaba sentar las bases de un Estado controlado por las elites militares y políticas, desembarazadas de la presión de otros grupos de interés.

Al mismo tiempo, el nuevo régimen impuso férreos controles a los incrementos salariales y suspendió las negociaciones colectivas habituales. También se propuso erradicar las áreas



El dirigente portuario Eustaquio Tolosa es conducido detenido por la policía.

improductivas de la economía, ante todo en distintos ámbitos del sector público y de las economías regionales subsidiadas (véase el capítulo IV). La prioridad de la nueva política sería el desarrollo del sector más dinámico de la economía. De tal modo, al suspender las negociaciones colectivas y el funcionamiento del sistema político, el régimen logró minar las dos fuentes de la capacidad negociadora tradicional de los sindicatos en el período 1958-1966. Enfrentada a un gobierno intransigente, la CGT convocó a regañadientes un paro de veinticuatro horas en marzo de 1967 para protestar contra los planes económicos del ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena. La respuesta del régimen consistió en suspender la personería gremial de muchos grandes sindicatos e interrumpir concretamente el funcionamiento de la CGT. Frente a esta catástrofe, la central obrera procuró reanudar las conversaciones con las autoridades. La respuesta fue el silencio. De ese modo, el régimen militar ponía a la conducción gremial frente a un dilema: su existencia institucional corría peligro si oponía resistencia a la política gubernamental y, al mismo tiempo, la dirigencia se arriesgaba a perder credibilidad entre sus afiliados cuando esa política afectara la vida de éstos.

La respuesta de la conducción sindical a esta crisis fue variada. Para los sindicatos que habían sido más golpeados por la política económica y sufrían la intervención gubernamental de sus organizaciones, la franca oposición tenía un atractivo inicial. En las circunstancias del momento, la tradicional política sindical de movilización y negociación era claramente insostenible. Con poco que perder, la oposición abierta parecía una opción lógica. Esta alternativa podía encontrar legitimación en la cultura política peronista si se postulaba como la encarnación de la tradicional oposición a los regímenes militares gorilas. Los sindicatos pertenecientes a este grupo —portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior— tomaron la ofensiva en el congreso convocado para normalizar la CGT en marzo de 1968. Entre los dirigentes presentes en él, una clara mayoría criticaba la incapacidad de las anteriores autoridades para oponerse a las políticas del régimen y abogaba por una actitud de abierta resistencia. Este congreso eligió como secretario general a Raimundo Ongaro, el carismático líder de los trabajadores gráficos, en contra del candidato vandorista. Cuando los vandoristas se reti-

raron y constituyeron su propia central obrera, la CGT de Ongaro comenzó a conocerse como CGT de Paseo Colón o CGT de los Argentinos. Esta organización se convirtió en un punto focal de la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad civil al autoritarismo del régimen (véase el capítulo VIII), a la vez que brindaba un centro organizativo a muchos duros marginados por Vandor en años anteriores.

Para numerosos sindicatos más pequeños con una posición tradicionalmente vulnerable en el mercado laboral, la oportunidad de construir un nicho dentro del nuevo régimen y lograr gracias a la protección estatal lo que habían sido incapaces de hacer por medio de la negociación parecía una alternativa igualmente lógica, una vez demostrada la ineficacia de la estrategia vandorista en la cual se habían apoyado. Conocidos como “participacionistas”, estos dirigentes gremiales aceptaron la retórica corporativista del régimen sobre la necesidad de que los sindicatos concertaran una estrecha alianza con el Es-



Raimundo Ongaro, mayo de 1969.

tado. También esa alianza con figuras militares podía aducir precedentes en la ideología y la historia peronistas.

Los principales sindicatos peronistas agrupados alrededor de Vandor trataron de evitar alternativas tan drásticas. Sostuvieron, en cambio, la necesidad de adoptar una estrategia cauta, con el objetivo de recuperar la fuerza sindical y al mismo tiempo mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno. Esta estrategia pragmática no era contradictoria con el tono general de desmovilización obrera prevaleciente en los años que siguieron al fracaso de los intentos de resistencia al régimen de Onganía.

Este debilitado y dividido movimiento obrero daría al presidente la “paz social” crucial para la implementación del “tiempo económico” del régimen. Las huelgas se convirtieron de inmediato en luchas contra el Estado y se recurría a las Fuerzas Armadas para aplastarlas. En estas condiciones, no había casi ninguna oposición nacional coherente a las políticas laborales y económicas del gobierno. Lo que el régimen ofrecía al movimiento obrero y a otros sectores de la sociedad argentina que sufrían las consecuencias de su política económica era la promesa de una mayor participación en las futuras etapas social y política de la revolución vagamente definidas.

Los pronósticos de manipulación social y política en los cuales se fundaba esa política cayeron hechos pedazos en mayo de 1969 cuando el descontento obrero y las tensiones de la sociedad civil se aliaron en una ola de protestas sociales generalizadas que se inició en Córdoba (véase el capítulo VIII). Si bien las implicaciones del Cordobazo fueron calamitosas para el régimen militar, también fueron ominosas para la jerarquía sindical. Aun la CGT de los Argentinos tuvo un papel relativamente marginal en los acontecimientos cordobeses. Tomados por sorpresa por los hechos, los sindicatos de todos los sectores del movimiento obrero intentaron ponerse a la cabeza de la movilización para restablecer así su credibilidad y negociar el poder con las autoridades nacionales. No obstante, los años que siguieron al Cordobazo presenciaron un agravamiento de la crisis de la dirigencia gremial peronista, ya que nuevos sectores comenzaron a poner en tela de juicio su posición.



En Puerta de Hierro, Juan D. Perón rodeado de dirigentes peronistas. Entre otros, Julio Guillan, Antonio Cañero, Armando Cabo, Alberto Iturbe. Sentados, Vicente Solano Lima, Isabel Perón, Delia Parodi y Augusto Vandor.

NUEVOS ACTORES DESAFÍAN A LA JERARQUÍA SINDICAL

Estos nuevos actores se concentraban principalmente en los sectores industriales más recientes establecidos durante el gobierno de Frondizi: sobre todo la fabricación de vehículos, la siderurgia y la petroquímica. Varias importantes características que los diferenciaban tendrían un profundo impacto en el surgimiento de una respuesta obrera militante a la patronal, el Estado y el movimiento sindical tradicional en el período posterior al Cordobazo. En primer lugar, Frondizi había permitido el establecimiento de sindicatos por empresa en muchas de estas industrias. Así sucedía, por ejemplo, en las plantas de automóviles de Fiat en Córdoba y en la nueva industria petroquímica. En otros casos, la representación gremial se otorgaba a sindicatos nacionales más débiles ya existentes. En la industria automotriz, por ejemplo, los derechos de organización fueron

concedidos al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), inicialmente un pequeño gremio de mecánicos de estaciones de servicio, en contra de las pretensiones de la UOM. La segunda diferencia de ese sector consistía en que las compañías insistieron en obtener —y lo lograron— el derecho a firmar convenios por empresa, lo cual socavaba el sistema de contratos nacionales por rama industrial previsto por la Ley de Asociaciones Profesionales.

La descentralización de las negociaciones colectivas y los sindicatos por empresa contribuyeron a producir una mano de obra inicialmente dócil en este nuevo y dinámico sector de la economía argentina. También debilitaron el poder de la estructura sindical nacional, porque trasladaban el centro de la negociación por los salarios y las condiciones laborales en sectores productivos cruciales al plano de cada empresa, en desmedro de las tratativas nacionales. En la práctica, esto significó la ausencia de representación de los sindicatos nacionales tradicionales, principalmente peronistas, en muchas de las nuevas industrias. Ésta era una consecuencia prevista de la política estatal y patronal. El gobierno de Illia había respondido a la hostilidad gremial peronista mediante una política laboral cuya intención era alentar una mayor autonomía sindical local.

Sin embargo, luego de 1969 se puso de manifiesto otra consecuencia —imprevista— de esa política. El traslado de las negociaciones salariales y sobre las condiciones laborales al nivel de cada empresa contribuyó al renacimiento de los sindicatos y seccionales locales. A largo plazo, tanto la negociación como los sindicatos de planta fortalecieron la iniciativa y la capacidad de los afiliados locales para actuar y presionar a sus gremios y a los empleadores. El hecho de que las condiciones y los salarios se determinaran localmente proporcionó un eje a la actividad de las bases, ausente cuando esas cuestiones se resolvían en el plano nacional y luego se transmitían a las seccionales locales. Esto tendría importantes consecuencias en los años posteriores al Cordobazo. Si bien la política laboral de las empresas del sector dinámico había garantizado el aislamiento casi completo de su personal con respecto a los sindicatos nacionales tradicionales, también significó, con el derrumbe del período de aquiescencia en mayo de 1969, que esas empresas se vieran frente a sindicatos que tenían muchas difi-

cultades para controlar la rebeldía de las bases. Esos gremios no contaban con el aparato de control interno que existía en los sindicatos peronistas tradicionales como la UOM, la construcción y los textiles. Ni siquiera sindicatos nacionales como el SMATA tenían la probada maquinaria interna de control característica de organizaciones industriales más antiguas. Por otra parte, tanto en los sindicatos de empresa como en las seccionales de los sindicatos nacionales que se rebelaban contra los dirigentes de éstos, tal como ocurría en las seccionales cordobesas del SMATA y Luz y Fuerza, las oposiciones locales se beneficiaban con la considerable autonomía financiera y organizacional que les otorgaba la legislación laboral. Sindicatos nacionales como el SMATA y Luz y Fuerza tenían estructuras federativas, y por esa razón su capacidad de doblegar el accionar de sectores locales díscolos era limitada.

La oposición laboral que floreció luego de 1969 quedó esencialmente confinada al interior del país. Sus representantes más conocidos tal vez fueran los dos sindicatos de las plantas de Fiat en Córdoba, SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Concord) y SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer). En Buenos Aires, con anterioridad a 1973, el movimiento obrero se mantuvo virtualmente inmune al levantamiento del interior. La nueva militancia obrera centrada en éste se distinguía por una serie de características. Recurría con frecuencia a la acción directa y a otras formas no convencionales de movilización sindical. También tenía una naturaleza fundamentalmente antiburocrática. Se autodefinía sobre todo en términos de su oposición a los modelos existentes de conducción gremial y formas de gobierno interno. Agustín Tosco, el líder del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la figura que llegó a simbolizar esta postura antiburocrática en el plano nacional, definía como burócrata a “alguien sin vocación, sin ideales, que se convierte en un típico ‘administrador’ de un cargo sindical, lo usa para su beneficio personal y desde ese lugar comienza a dominar a sus compañeros”. En contraste, la nueva camada de militantes proponía un liderazgo honesto basado en la probidad personal y un compromiso con la democracia interna.

En un sentido general, además, los dirigentes que ocuparon el primer plano en este período centrado en Córdoba también

procuraban dar forma a su protesta gremial en términos de preocupaciones ideológicas más amplias. El clasismo, tal la denominación habitual de este movimiento opositor, implicaba para sus seguidores una identificación del movimiento obrero con la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad socialista. En su concepción, el sindicato tenía una función vital de despertar las conciencias con el fin de preparar a los trabajadores para lo que sería en última instancia una batalla política contra la patronal y el Estado. La vehemente insistencia antiburocrática del clasismo en la democracia interna y en la participación masiva planteaba para la jerarquía sindical peronista una clara amenaza en términos de influencia y ejemplo. Tanto para los sindicatos como para los empleado-

SITRAC habla de la CGT

“Esta crisis no puede resolverse con enjuagues de trastienda; es decir, con un simple cambio de mascaritas o con una trenza en la que sólo se discuta la cesión de un ‘puestito’ para, en definitiva, mantener esta política burocrática que los trabajadores condenamos. Esta condena que apunta a la dirección de las 62, tanto a los obsecuentes del plan Levingston como los que apuestan a un golpe ‘salvador’, se extiende a la dirección cegetista encabezada por José Rucci (...) esta conducción trata de mantenerse con una nueva carga de oxígeno (...) Nosotros afirmamos que la dirección y la política que el movimiento obrero cordobés y nacional necesita deben surgir y haberse probado en las luchas que libramos contra nuestros enemigos (...) esta dirección y esta política, clasista y revolucionaria, ya han comenzado a dar sus primeros pasos (...) Para dar una salida que corresponde a nuestros intereses y reivindicaciones (...) importa que esa política que hoy surge arraigue en miles y miles de trabajadores de nuestra provincia y de todos los rincones de la Patria, que nos ayude a organizarnos por abajo y a barrer a esta conducción claudicante —que no nos representa— sentando las bases para la construcción de la CGT de y para la clase obrera y el pueblo.”

Fuente: Boletín de SITRAC, N° 1, 13-1-1971, citado en Natalia Duval, *Los sindicatos clasistas: SITRAC (1970-1971)*, Centro Editor de América Latina, 1988.

res, el reconocimiento clasista de la naturaleza inconciliable de los intereses de clase implicaba una batalla constante entre ambos y la negación del terreno común del compromiso tan esencial para los gremios tradicionales y la patronal. También el régimen militar advertía con claridad la amenaza. El movimiento opositor había demostrado coherentemente su aptitud de impugnar el orden público mucho más allá de las puertas de la fábrica. Demostraba asimismo su capacidad de enunciar una amplia gama de reclamos sociales y políticos y proponer una redefinición del papel del sindicalismo y su misión para adoptar formas radicales de movilización.

DEL CORDOBAZO AL RETORNO DE PERÓN

En los años posteriores al Cordobazo, las Fuerzas Armadas trataron de cerrar la caja de Pandora de la insurgencia social y política desatada por el levantamiento cordobés. La incapacidad del presidente Onganía y de su sucesor, el general Levingston, para cumplir esta tarea les costaría su desplazamiento del sillón de Rivadavia. Desde 1971, con la conducción del nuevo presidente, el general Alejandro Lanusse, los militares se dispusieron a preparar el terreno para un retorno ordenado al régimen civil. El Gran Acuerdo Nacional, con la guía de Lanusse, pretendía reinstaurar las instituciones tradicionales de la vida cívica y política a fin de desactivar la insurgencia social que inundaba la Argentina. La proscripción de la actividad política partidaria se levantó en julio de 1971. El alto mando de las Fuerzas Armadas también se propuso incluir al peronismo en el consenso nacional que intentaba construir. La solución política que imaginaba implicaba la legitimación electoral de un candidato respaldado por los militares —el propio Lanusse— en comicios prometidos para 1973. Las autoridades militares suponían que tanto el radicalismo como significativos sectores del peronismo lo aceptarían como un costo necesario de la transición hacia la democracia. En este escenario ideal, los sindicatos peronistas cumplirían el vital papel de proporcionar la base social del plan. Los estrategas militares del Gran Acuerdo Nacional presumían que la dirigencia gremial recibiría con agrado la oferta de una estrecha relación con

una figura militar favorablemente dispuesta. Luego del trauma del régimen de Onganía y del constante ataque de las nuevas fuerzas opositoras de la clase obrera, esos dirigentes darían la bienvenida a la oportunidad de restablecer su control y credibilidad como actores fundamentales del sistema político argentino, brindada por un Estado que solicitaba su apoyo.

Este escenario militar demostró falta de realismo por muchas razones. La principal fue la astuta contraestrategia de Perón, que se mostró capaz de canalizar en beneficio de sus propias necesidades la crisis cívica y social que seguía desgarrando a la sociedad argentina. La movilización masiva de la juventud de clase media y la capacidad en rápido crecimiento de los grupos guerrilleros para llevar a cabo acciones sumamente eficaces fueron utilizadas por Perón para hostigar al régimen y dar lustre a su imagen como la única fuerza capaz de restablecer el orden social y controlar la amenaza planteada por una juventud y una protesta obrera radicalizadas.

En última instancia, también se demostró infundado el supuesto del régimen de que podría reclutar a una proporción significativa de la nueva dirigencia sindical para revivir el reformismo militar.

La crisis de la credibilidad sindical provocada por el régimen de Onganía no podía superarse simplemente por medio de una proclamación gubernamental. ¿Podría la dirigencia gremial dirigir y encauzar una protesta social que había surgido al margen de su control y era independiente de sus deseos? La modificación de la política económica dispuesta por Lanusse, junto con la vuelta a una forma limitada de negociaciones colectivas, señalaban la perspectiva de cierta rehabilitación de la conducción sindical. Pero el gobierno no estaba dispuesto a conceder las negociaciones colectivas irrestrictas que habrían dado a los dirigentes gremiales las herramientas para reafirmar su indiscutida hegemonía sobre las bases y embarcar a sus sindicatos en el camino del compromiso y la alianza imaginados por el Gran Acuerdo Nacional. Si bien eran capaces de mantener el control del aparato gremial con sede en Buenos Aires, ya no podían movilizar y conducir a sus afiliados como lo habían hecho durante el apogeo del vandomismo.

Más importante aún, los estrategas militares subestimaban la posición cada vez más sitiada de las conducciones sindica-

les dentro del peronismo. En parte, esto se debía a la rehabilitación del sistema y los actores políticos. Aun un táctico tan astuto como Vandor sólo había logrado ambiguos resultados con las incursiones gremiales de mediados de la década de 1960 en la arena política. Con su asesinato y las incertidumbres de principios de la década siguiente, en el mejor de los casos las perspectivas sindicales dentro de una política democrática restaurada parecían dudosas. Los líderes gremiales eran conscientes de que cualquier apertura política fortalecería la posición de Perón y debilitaría la suya propia. Esto era especialmente cierto en un contexto que prometía la legalización política formal del justicialismo e incluso el posible retorno de Perón. Los sucesores de Vandor, conducidos por el nuevo secretario general de la CGT, José Rucci, apoyado por su compañero metalúrgico y dirigente de las 62 Organizaciones Lorenzo Miguel, adoptaron una actitud de completo acatamiento de las tácticas políticas de Perón. Subordinaron la CGT a las necesidades de negociación de éste con el régimen y las otras fuerzas políticas. Su principal interés consistía en afirmar sus pretensiones de compartir el botín ofrecido por el resurgimiento político de Perón.

La sensación de vulnerabilidad de la dirigencia sindical se debía a su inquietud por la influencia de las nuevas fuerzas dentro del movimiento. La amenaza planteada por los grupos guerrilleros y la Juventud Peronista era a la vez material y política. A partir del asesinato de Vandor en junio de 1969 y siguiendo con el homicidio de Alonso un año después, la guerrilla peronista inició una campaña de eliminación selectiva de líderes gremiales. La juventud de clase media que ingresaba en tropel al peronismo durante esos años señalaba a la burocracia sindical como el principal obstáculo a la concreción de las metas de esa corriente política como movimiento de liberación nacional. Para estos recién llegados, la burocracia sindical era una casta corrupta cuya función era reprimir y manipular a las masas peronistas y desviarlas de la lucha por una Argentina liberada.

La Juventud Peronista y las formaciones guerrilleras eran un desafío a toda la trayectoria del movimiento sindical dentro del peronismo y a la identidad que los dirigentes gremiales daban a éste como movimiento. El nacionalismo reformista que identificaban con el peronismo, y el pragmatismo y compromiso que

éste había llegado a implicar luego de 1955, sufrían hoy un asalto con características de cruzada moral emprendido por advenedizos sin antigüedad en el movimiento. Los recién llegados procuraban redefinir el peronismo en términos de un credo revolucionario que tenía poco significado para los dirigentes sindicales tradicionales. Esta redefinición entrañaba negar la legitimidad de la presencia misma de esos dirigentes dentro del nuevo peronismo imaginado por los jóvenes radicalizados.

Durante esos años, el propio Perón hizo poco por mitigar los temores de la conducción sindical. El líder justicialista advertía que los sectores juveniles representaban el humor prevalente de la sociedad argentina, en el que se mezclaban el resentimiento y la esperanza de renovación mucho más eficazmente que en una insegura dirigencia gremial. En ese carácter, la juventud era una importante herramienta de negociación para Perón, un recordatorio de la capacidad del peronismo de desestabilizar si no se reintegraba a la sociedad argentina en términos aceptables para él. A lo largo de 1972 hubo en los comentarios públicos de Perón un elogio constante a los “muchachos” y una crítica a la burocracia sindical. A medida que se acercaban las elecciones de 1973, los sindicatos adquirían creciente conciencia del menor peso que ahora tenían en el movimiento. En contraste con 1962 y 1965, cuando habían impuesto sus candidatos a voluntad, en estos momentos se veían obligados a aceptar la misma cantidad de candidaturas que las otras ramas del movimiento. No había una sola figura gremial que fuera candidato a gobernador. Más ominoso aún era el hecho de que el tono y la organización de la campaña electoral quedaran en manos de sectores juveniles que hacían tanto de los militares como de la burocracia sindical el blanco de un particular repudio.

Así, los resultados de las elecciones del 11 de marzo, que significaron el retorno del peronismo al poder, fueron vistos con escaso entusiasmo por la conducción gremial del movimiento. Tras dieciocho años de compromiso formal con la recuperación del poder, la realidad que enfrentaban cuando Héctor Cámpora juró como presidente el 25 de mayo ofrecía poco margen para el optimismo.

Traducción de Horacio Pons

BIBLIOGRAFÍA

- Abós, Alvaro, *Augusto T. Vandor: sindicatos y peronismo*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- Baschetti, Roberto (comp.), *Documentos de la resistencia peronista, 1955-1970*, La Plata, Ediciones de la Campana, 1997.
- Brennan, James, *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.
- Carri, Roberto, *Sindicatos y poder en la Argentina*, Buenos Aires, Sudestada, 1967.
- Gazzera, Miguel, "Nosotros los dirigentes", en Ceresole, Norberto, y Gazzera, Miguel, *Peronismo: autocrítica y perspectivas*, Buenos Aires, Descartes, 1970.
- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Martuccelli, Danilo, y Svampa, Maristella, *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada, 1997.
- Perón, Juan Domingo, y Cooke, John William, *Correspondencia*, dos tomos, Buenos Aires, Granica, 1973.
- Pozzi, Pablo, y Berrotarán, Patricia, *Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina, 1955-1989*, Buenos Aires, Letra Buena, 1993.
- Senén González, Santiago, *El sindicalismo después de Perón*, Buenos Aires, Galerna, 1971.
- Senén González, Santiago, y Bosoer, Fabián, *El hombre de hierro*, Buenos Aires, Corregidor, 1993.
- Torre, Juan Carlos, *El proceso político interno de los sindicatos argentinos*, documento de trabajo N° 89, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1974.
- Walsh, Rodolfo, *¿Quién mató a Rosendo?*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969.